

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501320190058701, promovido por el señor **CARLOS ALBERTO PINO GUERRA**, en contra de **PROTECCIÓN S.A. Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, de acuerdo al grado jurisdiccional de consulta establecido en el artículo 69 del CST solo a favor del Ministerio de Hacienda, y de igual forma en apelación interpuesta por la misma parte.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **378**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Alberto Pino Guerra interpuso acción judicial, solicitando se condene a Protección al reconocimiento y pago de la reliquidación de la devolución de saldos teniendo en cuenta para ello, el bono pensional del tiempo cotizado en el Régimen de Prima Media con prestación definida desde el 2 de abril de 1972 al 11 de diciembre de 1991 correspondiente a 740 semanas de cotización. Por ende, se ordene a la Protección SA a reconocer la indexación sobre las sumas adeudadas, lo que ultra y extra petita.

Fundamentó fácticamente lo pretendido, en que, presentó solicitud de devolución de aportes como consecuencia de la negativa de la pensión de vejez, por no cumplir con los requisitos legales para acceder a dicha prestación. Protección, le expuso que solo realizaría la devolución de saldos con las sumas que, estaban en la cuenta de ahorro individual, pero no con el tiempo cotizado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. El argumento de la oficina de Bonos Pensionales es incompatibilidad entre la calidad de pensionado con las prestaciones económicas del Régimen de Ahorro Individual.

Admitida la demanda, la *a quo* ordenó integrar el litigio con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y una vez notificados los accionados contestaron así:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expuso, oponerse a las pretensiones de la demanda, pues a su sentir el actor no tiene derecho a recibir ninguna prestación, e invoco las excepciones de : “Inexistencia de la obligación a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “Prescripción”.

Protección SA, se opuso a lo solicitado por el demandante, y excepcionó: “Falta de causa legítima para pedir”, “Inexistencia de la obligación”, “Hecho de un tercero”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe de parte de la demandada”, “Compensación”, “Prescripción”, “Innominada o genérica”

En sentencia del 11 de agosto del año 2020, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, resolvió: Condenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la emisión del bono pensional tipo A en favor del demandante y su consecuente pago a la cuenta de ahorro individual en Protección SA, dentro de los términos previstos en los Decretos 1299 de 1994, 1748 de 1995, 151 de 1998 y 3798 de 2003. Así mismo, ordenó a Protección SA incorporar los valores provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondientes al bono pensional ordenado y efectuar la reliquidación de la devolución del capital allí acumulado al demandante, con la indexación. Condenó en costas a la accionada Ministerio de Hacienda y en favor del demandante.

RECURSO INTERPUESTO

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de alzada, exponiendo que la *a quo* dispone la aplicación automática de los precedentes jurisprudenciales y dentro de ellos, una serie de sentencias emitidas por la Sala Laboral y otras del Consejo de Estado. Pero, una de las sentencias que se tuvo en cuenta, la sentencia SL 451 del 2013, donde la Corte Suprema examinó un proceso con una premisa fáctica diferente a la marras, pues allí, había imposibilidad de acceder a la pensión, y se ordenó la emisión del bono pensional para cofinanciar la pensión, que era el punto clave que se trataba en ese momento pues se decía que solo se financiaba la pensión de vejez con el bono pensional y no la devolución de saldos, pero no se toca el tema que la persona ya tenga una pensión recibida como en este caso. Explicó, encontrarse en desacuerdo con la emisión del bono pensional pues para ello, debe acudir a las voces del presupuesto general de la Nación, que está conformado con ingresos corrientes tributarios o no, los recursos de capital que son los recursos que genera el estado, y los recursos parafiscales que son administrados por el estado que financian la salud y el régimen pensional. En sentencia C-644 (sinc) estableció su naturaleza, y dentro de las características, que se pueden gestionar por un órgano estatal pero que no hacen parte del mismo y es con los recursos del presupuesto general de la nación que se financia el bono pensional, al igual que, los valores del FOMAG, con lo que sería una doble asignación pública. Por tal motivo, solicita sea revisado con detalle, pues

presupuestalmente no se puede obligar a una doble erogación. Finalizó su intervención con la petición de revocatoria de la sentencia en lo que toca al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Corrido el traslado para alegar, las partes no hicieron manifestación alguna.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, de acuerdo al grado jurisdiccional de Consulta y el recurso interpuesto, consiste en determinar si es procedente la emisión del bono pensional tipo A por el tiempo que el demandante cotizó a Colpensiones, con el fin de reliquidar la devolución de saldos.

Problema jurídico asociado, compatibilidad entre la emisión del bono pensional y la prestación que el actor recibe del FOMAG y si el bono pensional proviene o no del Presupuesto Nacional.

CONSIDERACIONES

El señor Carlos Enrique Pino Guerra se encuentra pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio como beneficiario de una pensión de jubilación. De igual forma, se afilió ante a Colpensiones (antes ISS), en donde efectuó varias cotizaciones de la mano de empleadores del sector privado, desde el año 1978 en el Colegio Sagrado Corazón, 1980 con el Colegio La Salle, Universidad de Medellín en el año 1985, Colegio San José en el año 1991, y en el mismo año con la Universidad San Buenaventura, para un total de 740.86 semanas cotizadas.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, establece dentro las exclusiones al sistema general de pensiones, los afiliados al FOMAG. Empero, el artículo 284 ibídem, dispuso el derecho al pago de aportes al sistema general de pensiones para los profesores de establecimientos particulares de enseñanza, por el período escolar contratado.

Para la Sala, es determinante recordar, que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 precisó que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al momento de entrada en vigencia de dicha Ley (junio 26 de 2003) será el de las disposiciones vigentes con anterioridad, es decir, la Ley 91 de 1989, pero, los vinculados a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 **son afiliados obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones implementado en la Ley 100 de 1993, pero administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**. Esta situación que, además, fue ampliamente explicada por la *a quo*, estimó que aquellos que se afiliaron desde ese momento deben pertenecer al sistema y financiarlo, generando una unidad en la prestación, se manera unísona con el tiempo laborado en el magisterio.

Por lo tanto, el correcto entendimiento del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, es que, el demandante, podía prestar servicios a establecimientos educativos de naturaleza pública y obtener con ello, la prestación de tipo oficial, pero, de manera simultánea, (recuérdese que se afilió al entonces ISS hoy Colpensiones desde el año 1978), podía laborar en instituciones de tipo educativo, particulares para adquirir, si bien una pensión de vejez por parte del entonces ISS, o, también trasladarse a otro fondo privado, donde eventualmente podía adquirir su derecho pensional o recibir la devolución de saldos.

Igualmente, respecto a la posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de los profesores, como lo indicaba el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fijó posición en torno a la correcta comprensión, en sentencia SL, 06 dic. 2001, rad. 40848 así:

“A su vez, el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, consagra la posibilidad de que los profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “(...) que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes”; precepto reglamentario que sólo

puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo.”

Esta postura, ha sido pacífica en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en donde en sentencias como SL 451 de 2013 se ha dada la posibilidad de trasladar los aportes como bono pensional al RAIS, así:

“En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional.”

Es, totalmente válido, que una persona trabaje en establecimientos educativos oficiales y reciba una pensión de jubilación oficial, mientras trabaja simultáneamente en instituciones privadas que financian aportes obligatorios para una posible pensión de vejez en el ISS, hoy Colpensiones, o afiliarse, o posteriormente trasladarse a un fondo privado, solicitándose la entrega de esos aportes pensionales por medio del bono pensional sin que esto genere incompatibilidad entre las prestaciones económicas que cada régimen reconoce, y en ese sentir, es perfectamente válido también el reconocimiento de lo que se deriva de no arribar a la prestación de vejez, es decir, la devolución de saldos en el RAIS o la indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones, posición reiterada en sentencias recientes como SL 1127 de 2022 y SL 3775 de 2021.

El bono pensional, constituye un título de deuda pública en los términos del artículo 121 de la Ley 100 de 1993, y si bien se observa en el proceso un total de

740 semanas cotizadas, éstas semanas no provienen de las arcas de la nación como equivocadamente no indica el recurrente, sino, de las cotizaciones efectuadas por empleadores y trabajadores. Es por eso, que no se puede decir, que se trate de un dinero público, pues si bien la administración de dichas sumas traducidas en dinero recae en manos del Ministerio para la emisión del bono pensional, también lo es que, dicho capital fue construido por el trabajador y su empleador, y es a él a quien pertenece, sin que pueda confundirse quién tiene administrado el dinero, con quién materializó el mismo, como lo pretende hacer el recurrente.

Precisamente, en la sentencia CSJ SL 3775-2021 la Corte indicó:

"(...) En lo que respecta a la alegada incompatibilidad entre la pensión vitalicia de jubilación y el bono pensional, no le asiste la razón a la censura en este medular aspecto que fue bien abordado por el juez plural, en la medida en que, como se ha venido explicando, el bono pensional si bien, es título de deuda pública según lo establecido en el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, también hace parte de las regulaciones y figuras propias del Sistema General de Pensiones y su finalidad, como ya se dijo, consiste en contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las prestaciones de los afiliados al Sistema de Seguridad Social. Por todos es sabido que ha determinado esta Sala de Casación en numerosas sentencias, que no es del caso recordar ahora, que los recursos del Sistema Pensional en el caso de la administradora pública del Régimen de Prima Media son de naturaleza parafiscal, de donde no tiene sentido sostener que uno de los elementos que conforman esos recursos y con los cuales finalmente se va a financiar una prestación económica, goza de una naturaleza distinta que los hace incompatibles con la prestación a la cual está afectado, pues se recuerda, una vez más, ese instrumento no es otra cosa que la conversión en dinero de las semanas servidas o cotizadas y que tienen por eje central el trabajo humano, que para esos efectos se encuentra reflejado en un dispositivo financiero. A través de los cálculos complejos con que fue concebido legal y conceptualmente el bono pensional, representa las cotizaciones que en su momento fueron hechas por los empleadores privados y el trabajador al ISS, en este caso particular, entre el 16 de mayo de 1984 y el 31 de diciembre de 2000, con lo cual no puede confundirse el origen primigenio de los recursos con el instrumento que posteriormente los suple y materializa (...)”».

Es, así pues en el régimen de ahorro individual, como el bono pensional, debe unirse con el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual para financiar una pensión de vejez, y cuando dicho capital aún, así no sea suficiente para el reconocimiento de la prestación de vejez, deberá hacer parte de la devolución de saldos que el fondo pensional entrega al afiliado.

De esta manera, conforme a la obligación establecida en el artículo 121 de la Ley 100 de 1993 cuenta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la obligación de emisión del bono pensional por las 740.86 semanas cotizadas al entonces ISS, hoy COLPENSIONES, del bono pensional Tipo A, rumbo a la cuenta de ahorro individual del demandante, de la manera impuesta por los decretos 1299 de 1994, 1748 de 1995, 1513 de 1998 y 3798 de 2003 para que, Protección SA proceda con la reliquidación de la devolución de saldos del actor.

En atención al grado de Consulta, se da estudio a la excepción de prescripción, la cual, no tiene vocación de prosperidad, pues el derecho solicitado es imprescriptible de acuerdo a lo preceptuado en la sentencia SL 4559 del año 2019, pues la devolución de saldos sigue el mismo criterio de la pensión de vejez, que en su esencia misma no se extingue, al ser parte integrante del sistema de seguridad social, confirmándose que se declara no probada.

Conforme a lo indicado se confirmará íntegramente la sentencia de primera instancia, incluida la imposición de costas, pues la negativa en la emisión del bono pensional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue lo que, finalmente instó al actor a interponer la acción judicial.

Costas en esta instancia a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor del demandante ante la improsperidad del recurso de alzada en la suma de Un Millón Ciento Sesenta Mil Pesos (\$1.160.000).

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar íntegramente la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor de la parte actora en la suma de Un Millón Ciento Sesenta Mil Pesos (\$1.160.000).

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e19bb36b274f1669189c01271df9621082b1984987b858f98b1524213ae83628**

Documento generado en 24/11/2023 01:07:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>